



SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL

Hallazgos preliminares

Acknowledgements

The Rule of Law in North Macedonia: Key Findings from the General Population Poll 2023 was produced by the World Justice Project under the research oversight of Alejandro Ponce and the executive direction of Elizabeth Andersen.

The production of this report was led by Ana María Montoya. This report was prepared by Erin Campbell, James Davis, Dalia Habiby, Artha Pillai, Santiago Pardo, and Carlos Toruño.

The findings in this report are taken from the General Population Poll (GPP) conducted for the World Justice Project in 2023. The GPP's conceptual framework and methodology were developed by Mark David Agrast, Juan Carlos Botero, and Alejandro Ponce. The production of this iteration of country report series was developed by Ana María Montoya, Santiago Pardo, Alejandro Ponce, Tanya Primiani, Hannah Rigazzi, Natalia Rodríguez Cajamarca, Victoria Thomaides, and Carlos Toruño Paniagua.

Sampling, fieldwork, and data processing in North Macedonia was conducted by IPSOS Strategic Marketing.

Mariana Lopez was the graphic design lead for this report. FlitStudio served as lead website developer with assistance from Natalia Jardon, Mariana Lopez, and Enrique Paulin.

This report was made possible with the support of the U.S. Department of State's Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs' Office of Western Hemisphere (INL). The views expressed in this report are those of the survey respondents and do not necessarily represent the views of INL.

Photo for cover provided by Kisa Markiza, from iStock.

© Copyright 2023 by the World Justice Project.

Requests to reproduce this document should be sent to:

Alejandro Ponce
World Justice Project
1025 Vermont Avenue NW, Suite 1200
Washington, DC 20005, USA
Email: aponce@worldjusticeproject.org

WASHINGTON, DC

1025 Vermont Avenue
NW, Suite 1200
Washington, DC 20005,
USA
P +1 (202) 407-9330

MEXICO CITY

Gobernador José
Guadalupe Covarrubias
57-20, San Miguel
Chapultepec, 11850,
Miguel Hidalgo, Mexico
City
worldjusticeproject.mx

 worldjusticeproject.org

 facebook.com/thewjp/

 twitter.com/TheWJP

TABLA DE CONTENIDOS

1. PRESENTACIÓN

2. INTRODUCCIÓN

3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

I. Encuadre conceptual: justicia centrada en las personas

II. Metodología de análisis de datos

4: DEBIDO PROCESO

I. Proceso justo

29 Derecho a contar con información sobre tu propio proceso

30 Derecho a la no incriminación

33 Defensa adecuada

35 Presunción de inocencia

35 Justicia pronta

35 Imparcialidad, independencia, competencia y oralidad judicial

II. Uso arbitrario de la autoridad

29 Uso excesivo de la fuerza

30 Hallazgos

33 Corrupción

III. Respeto a Derechos Humanos

29 Derecho a la integridad personal: tortura

30 Derecho a la libertad personal: detención, prisión preventiva y sentencia

5: POLÍTICA CRIMINAL

I. Estrategia de investigación y persecución penal

29 Delitos prioritarios con sentencia

30 Actividades de delincuencia organizada

33 Uso diferenciado de la fuerza en la detención y por delito

35 Competencia de delitos: Federal vs Estatal

35 Estrategia de investigación penal

35 Detenciones en flagrancia vs órdenes de detención

35 Inspecciones efectivas y arbitrarias

35 Señalamiento de un tercero

35 Interrogatorios

35 Pruebas forenses

35 Tortura como mecanismo para obtener declaraciones como pruebas
inculpatorias

35 Estrategia de persecución penal

II. Desempeño institucional

- 29 Carga de trabajo
- 30 Eficiencia
- 33 Eficacia

III. Coordinación/Interacción entre autoridades

- 29 Contrapesos procesales
- 30 Coordinación para la investigación
- 30 Coordinación para el cumplimiento de etapas procesales

PRESENTACIÓN

El sistema de justicia penal acusatorio en México ya no es ninguna novedad. Han pasado 15 años desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio 2008 la trascendental reforma constitucional que introdujo a nuestro país el proceso penal acusatorio y oral. A su vez, han transcurrido casi 10 años desde la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todas las instituciones del entorno de seguridad y justicia han sufrido una o varias modificaciones y/o adecuaciones orgánicas y operativas. Policías, ministerios públicos o fiscales, defensores públicos, defensores privados, juezas y jueces penales, magistrados penales, ministros de la SCJN, supervisores de medidas cautelares, asesores jurídicos: todas y cada una de las personas operadoras han recibido horas y horas de capacitaciones sobre el nuevo sistema penal acusatorio, si no es que muchos pertenecen ya a aquellas generaciones -no tan jóvenes- que nunca conocieron ni ejercieron el sistema inquisitivo.

Cabe resaltar que a lo largo de estos 15 años desde los ejes de planeación nacional, planeación sectorial y políticas de las instituciones de justicia penal se ha hecho hincapié en ciertos temas transversales, principalmente el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género.

Es momento de hacer un corte de caja respecto de la maduración del sistema de justicia penal acusatorio en México y analizar cómo opera el sistema que miles de personas viven día a día, desde hace por lo menos 7 años. En ese sentido, la fuente principal de este diagnóstico es la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 (ENPOL), aplicada por INEGI a más de 60 mil personas en prisión, ya sea porque se encuentran atravesando un proceso penal o cumpliendo sentencia. Es la experiencia agregada de todas estas personas la que nos puede dar un panorama real, cercano y completo del estado de la justicia penal en México.

El análisis de la ENPOL incorpora el marco de referencia de justicia centrada en las personas, el cual se centra en el bienestar, los derechos y las necesidades de justicia de todas las personas cuando enfrentan cualquier asunto legal. En el contexto penal, las necesidades de justicia implican, por un lado, las distintas garantías y derechos de las personas procesadas al entrar en contacto con el sistema penal y, por otro, las necesidades de la sociedad y de las víctimas por vivir en un contexto más seguro, con un sistema de justicia justo, efectivo, íntegro y responsivo.

La justicia centrada en las personas se centra en el bienestar, los derechos y las necesidades de los individuos cuando enfrentan cualquier asunto legal

La justicia centrada en las personas es consistente con las metas globales de los sistemas de justicia: la protección de derechos, una justicia accesible y efectiva, la seguridad pública y la rendición de cuentas. Ofrece un nuevo enfoque para diseñar e implementar programas de justicia, basado en datos y evidencia que ayuden a orientar los procesos co-creativos de política pública, tomando como punto focal, las experiencias y necesidades de justicia de todas las personas, incluidas las personas acusadas, víctimas y la sociedad en general.

QUIÉNES ESTAN EN PRISIÓN

El análisis del sistema de justicia penal que presenta este reporte se construye a partir de las experiencias de las personas que se encontraban en prisión hasta junio de 2021 y que fueron juzgadas bajo el sistema acusatorio. Estas experiencias, estructuradas a través de una muestra representativa representan la vivencia de 27,107 hombres y 7,386 mujeres.

El tamaño y la representatividad de la muestra permite realizar distintos cortes. En relación con el sexo, la muestra se compone por el 79% de hombres y el 21% de mujeres; a su vez, el 6% reportó ser parte de la comunidad LGBTQ mientras que el 94% no . En relación con la preferencia sexual, el 94% de las personas reportaron ser heterosexuales, el 4% se reportó como bisexual y el 2%, como homosexual.

La nacionalidad de las personas es predominantemente mexicana ya que solo el 2% respondió ser de otra nacionalidad. En relación con la pertenencia étnica, el 17% se autoadscriben como personas indígenas y el 2%, como personas afromexicanos o afrodescendientes. Sin embargo, solo el 5% de la muestra es hablante de una lengua indígena.

La edad más frecuente de las personas de la muestra está entre los 25 y 35 años, representando el 42%. En contraste, las personas que tienen entre 20 y 25 años, representan el 14%, y las personas entre 35 y 40 años de edad, representan el 16%. La escolaridad es recogida por INEGI a través del grado educativo terminado. El 21% de las personas que terminaron primaria, el 46% de las personas completó la secundaria y el 20% de las personas que concluyeron la preparatoria o bachillerato. El estado civil de las personas es diverso pues el 46% de la muestra reportó tener una pareja, ya fuera en unión libre o en matrimonio, mientras que el 26% reportó ser soltero y las personas separadas o divorciadas representan el 26%.

El color de piel de las personas de la muestra es predominantemente moreno claro y moreno . Por su parte, el 24% de las personas reportaron tener alguna condición de discapacidad, ya fuera visual, auditiva o motriz. Respecto de los padecimientos de salud, el 2% tuvo COVID.

En relación con la condición procesal, los delitos más frecuentes son el robo y el homicidio y el 40% de la muestra se encuentra esperando una sentencia (con la calidad de persona procesada). Las personas sentenciadas representan el 60% de las personas de la muestra y las penas más frecuentes de las sentencias son de 5 a 10 años, impuestas al 33% de la muestra, de 0 a 5 años impuestas al 19%, y de 10 a 15 años, al 13%. Finalmente, de las 34,493 personas, el 44% se reconoce como culpable y el 56% se reportó como inocente.

ESTRUCTURA

La estructura analítica del reporte se divide en dos partes: la primera es **Debido Proceso** que se centra en las necesidades de justicia de las personas detenidas y procesadas, e integra tres secciones: derechos procesales durante el proceso, el uso excesivo de la autoridad, por ejemplo, el uso excesivo de la fuerza durante el arresto, y el respeto a los derechos humanos, como las violaciones a la integridad personal a través de la tortura. La segunda parte consiste en la **Política Criminal** y se centra en las necesidades de la sociedad para un sistema de justicia justo, efectivo y responsive. Por lo tanto, esta segunda parte se divide en tres secciones: las estrategias centrales en cuanto a la investigación y persecución de los delitos, el desempeño institucional y la coordinación y controles interinstitucionales.

ÍNDICE

A. DEBIDO PROCESO

A.1. CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS PROCESALES

- A.1.1. Derecho a la información accesible y suficiente
- A.1.2. Derecho a la no incriminación
- A.1.3. Derecho a una defensa adecuada
- A.1.4. Derecho a la presunción de inocencia
- A.1.5. Derecho a una justicia pronta
- A.1.6. Derecho a ser juzgado oralmente por un tribunal imparcial, independiente y competente

A.2. USO ARBITRARIO DE LA AUTORIDAD

- A.2.1. Uso excesivo de la fuerza
- A.2.2. Prácticas de corrupción

A.3. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

- A.2.1. Respeto a la integridad personal
- A.2.2. Respeto a la libertad

B. POLÍTICA CRIMINAL

B.1. ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN PENAL Y PERSECUCIÓN PENAL

- B.1.1. Delitos prioritarios
- B.1.2. Competencia estatal vs federal
- B.1.3. Estrategias de investigación penal
- B.1.4. Estrategias de persecución penal

B.2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

- B.2.1. Cargas de trabajo
- B.2.2. Eficiencia
- B.2.3. Eficacia

B.3. COORDINACIÓN Y CONTROLES INSTITUCIONALES

- B.3.1. Contrapesos procesales
- B.3.2. Coordinación inter-institucional

DEBIDO
PROCESO

A. DEBIDO PROCESO

Introducción. Índice de criterios mínimos de debido proceso.

El primer capítulo sobre Debido proceso en México atiende la pregunta básica acerca de cuáles son las necesidades de justicia de las personas que entran en contacto con el sistema de justicia penal. Estas necesidades pueden analizarse en tres distintas temáticas: a) aquellas vinculadas con el **proceso justo** de cualquier persona, a través de las garantías procesales que deben cumplirse para esto; b) las necesidades que derivan de un **ejercicio arbitrario de la autoridad**, concretamente respecto del uso proporcional o excesivo de la fuerza durante la detención y del ejercicio arbitrario de la autoridad patente en prácticas de corrupción, y c) la protección a derechos humanos básicos como la **integridad personal y la libertad**.

Si bien cada temática está desarrollada ampliamente en el reporte, también se desarrolló un **Índice de criterios mínimos de debido proceso** el cual está integrado por 13 distintos componentes que deben cumplirse para lograr un estándar mínimo de debido proceso, consistentes en:

PROCESO JUSTO

1. Si la persona contó con una defensa oportuna en el MP.
2. Si la persona se declaró culpable o se autoincriminó por presión física o psicológica ante el MP.
3. Si el defensor explicó a la persona procesada cómo sería el proceso.
4. Si el defensor explicó a la persona procesada los hechos por los cuales se le acusa.
5. Si la persona sintió que el juez le consideraba culpable antes del juicio.
6. Si el tiempo de traslado entre la detención y a la autoridad competente es justificable.
7. Si el juez estuvo presente en las audiencias.

USO NO ARBITRARIO DE LA AUTORIDAD

8. Si la policía aplicó un uso de la fuerza excesivo al llevar a cabo la detención.
9. Si la policía realizó prácticas de corrupción.
10. Si el MP realizó prácticas de corrupción.
11. Si las autoridades del juzgado realizaron prácticas de corrupción.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

12. Si la persona sufrió algún tipo de tortura física o psicológica durante el traslado o su estancia en el MP.
13. Si la persona fue detenida de manera irregular, esto es, mientras caminaba en la calle o fue sacada del lugar en el que estaba.

Estos 13 criterios mínimos están sustentados en derechos establecidos y protegidos constitucional y convencionalmente y el Índice se construyó con base en la experiencia de 18.954 personas sentenciadas en el sistema penal acusatorio. Además, sólo se consideraron las personas que tenían información sobre, al menos 8 criterios de debido proceso.

Hallazgos. Índice de Debido Proceso

Un primer hallazgo es que a pocas personas sentenciadas se les cumplió la totalidad de los criterios mínimos de debido proceso, esto es, sólo al 4% de las personas sentenciadas. Sin embargo, el 80% de los criterios mínimos de debido proceso se le cumplió al 49% de las personas. El cumplimiento del debido proceso se vive de manera diferenciada pues es más probable que a las mujeres no se les cumpla más de la mitad de criterios mínimos, así como a las personas mayores de 30 años. Por su parte, a los hombres es más probable que se le cumplan casi todos –90%– los criterios mínimos.

Un segundo hallazgo es sobre el proceso justo. Al 14% de las personas sentenciadas se les cumplió todos los criterios mínimos de un proceso justo, y al 77% de las personas se les cumplió al menos el 70% de sus criterios mínimos. Sin embargo, es a las mujeres y a las personas mayores de 30 años a quienes es más probable que no se le cumpla la mayoría –90%– de los criterios mínimos.

Un tercer hallazgo es sobre el uso no arbitrario de la autoridad. Al 37% de las personas se les cumplieron todos los criterios mínimos, es decir, fueron detenidos con un uso proporcional de la fuerza y no vivieron prácticas de corrupción. Por otro lado, los grupos demográficos que tienen menor probabilidad que se les cumplan los criterios mínimos son: las mujeres y las personas financieramente inseguras.

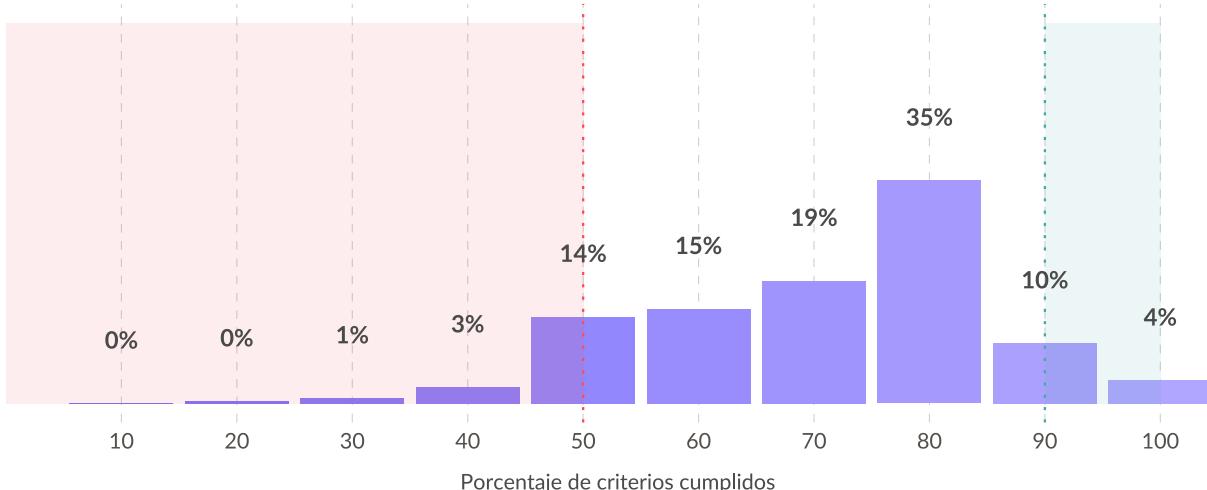
Un último hallazgo es sobre la protección a los derechos humanos. Sólo al 20% de las personas se le protegen sus derechos humanos, concretamente su integridad física y su libertad, mientras que al 25% no se le protege ninguno de estos derechos. Es mayor la probabilidad que esta falta de protección la experimentan las mujeres.

DEBIDO PROCESO

GRÁFICA 1.1

Cumplimiento de los 13 criterios mínimos de debido proceso y su distribución en la población sentenciada

El cumplimiento de criterios mínimos de debido proceso sólo se cumple para el 4% de las personas sentenciadas.

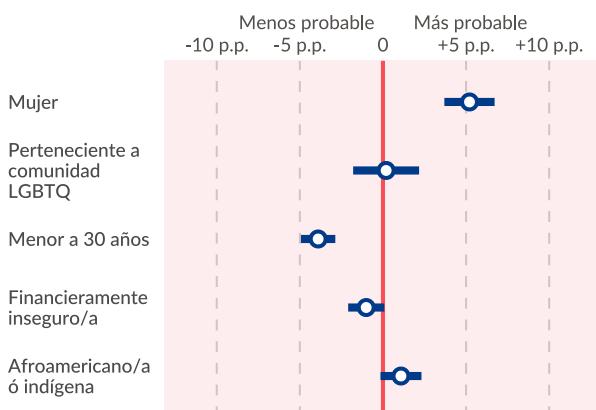


GRÁFICA 1.2

Criterios mínimos de acuerdo a las características sociodemográficas de los sentenciados

PROBABILIDAD QUE SE CUMPLA MENOS DEL 50% DE LOS CRITERIOS

Las mujeres y las personas mayores de 30 años tienen mayor probabilidad de que se les cumplan apenas la mitad de los criterios mínimos.



PROBABILIDAD QUE SE CUMPLA MÁS DEL 90% DE LOS CRITERIOS

El cumplimiento del debido proceso es diferenciado pues los hombres tienen mayor probabilidad de que se les cumplan la mayoría de los criterios mínimos.



Nota: Los puntos indican el efecto marginal de cada grupo sociodemográfico, medido en puntos porcentuales (p.p.). Las líneas indican el intervalo de confianza de dicho efecto al 95%. Para el grupo de personas que se cumplen menos del 50% de los criterios, sólo se les garantiza hasta 5 criterios. En cambio, para el grupo de personas que cumplen más del 90% de los criterios, se les garantiza como mínimo 9 criterios.

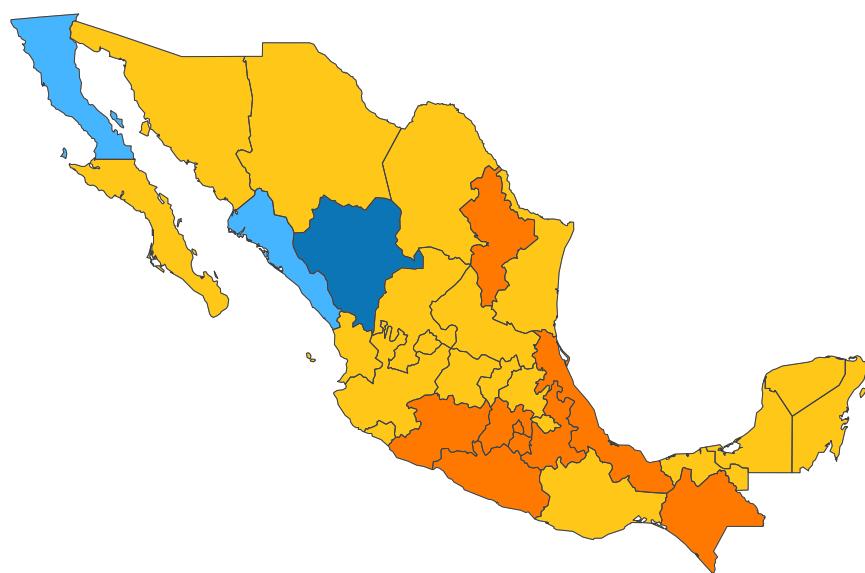
Fuente: ENPOL 2021.

GRÁFICA 1.3

Cumplimiento promedio de los criterios mínimos por Estado

Los Estados con mayor promedio de cumplimiento de criterios mínimos son Durango, Sinaloa y Baja California. En cambio, los Estados con menor cumplimiento promedio son México, Michoacán y Chiapas.

Estado	%
Aguascalientes	73.0
Baja California	75.6
Baja California Sur	74.3
Campeche	73.0
Chiapas	68.3
Chihuahua	74.0
Coahuila	73.1
Colima	71.4
Distrito Federal	66.8
Durango	84.1
Guanajuato	74.4
Guerrero	69.7
Hidalgo	73.9
Jalisco	71.5
Michoacán	66.9
Morelos	69.6
México	65.2
Nayarit	74.5
Nuevo León	69.3
Oaxaca	73.5
Puebla	69.8
Querétaro	71.8
Quintana Roo	73.8
San Luis Potosí	72.6
Sinaloa	79.3
Sonora	74.2
Tabasco	72.1
Tamaulipas	72.7
Tlaxcala	71.3
Veracruz	69.3
Yucatán	71.4
Zacatecas	74.2

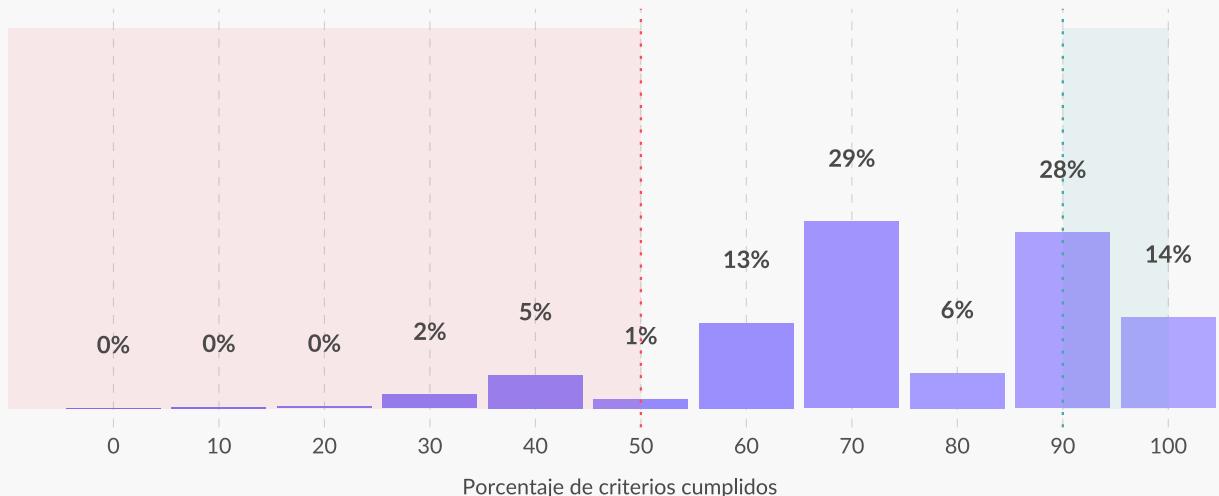


PROCESO JUSTO

GRÁFICA 2.1

Cumplimiento de los 7 criterios mínimos de proceso justo y su distribución en la población sentenciada

El cumplimiento de criterios mínimos de proceso justo se concentra en 14% de las personas sentenciadas, mientras que al 77% de personas se les cumplió, por lo menos, el 70% de los criterios mínimos.

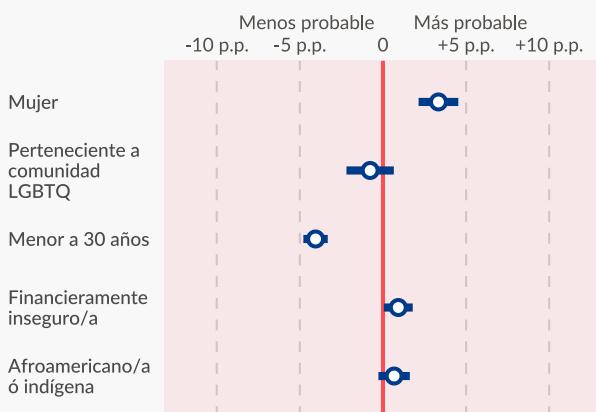


GRÁFICA 2.2

Criterios mínimos de acuerdo a las características sociodemográficas de los sentenciados

PROBABILIDAD QUE SE CUMPLA MENOS DEL 50% DE LOS CRITERIOS

El cumplimiento del proceso justo es menos probable para las mujeres, las personas financieramente inseguras y las mayores de 30 años.



PROBABILIDAD QUE SE CUMPLA MÁS DEL 90% DE LOS CRITERIOS

Los hombres y las personas jóvenes tienen mayor probabilidad de que se les cumplan la mayoría de los criterios mínimos de un proceso justo.



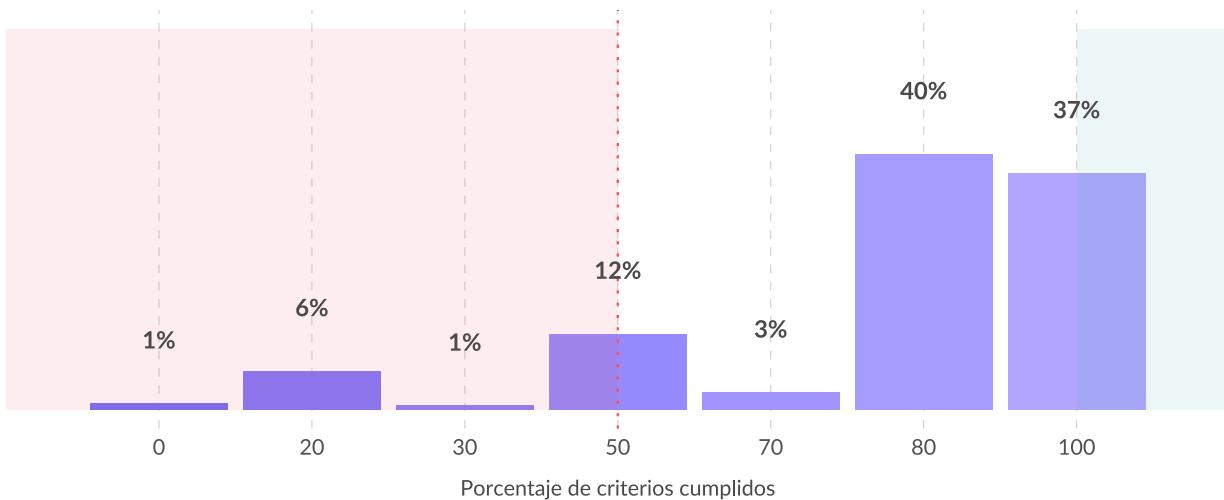
Nota: Los puntos indican el efecto marginal de cada grupo sociodemográfico, medido en puntos porcentuales (p.p.). Las líneas indican el intervalo de confianza de dicho efecto al 95%. Para el grupo de personas que se cumplen menos del 50% de los criterios, sólo se les garantiza hasta 3 criterios. En cambio, para el grupo de personas que cumplen más del 90% de los criterios, se les garantiza como mínimo 5 criterios.

Fuente: ENPOL 2021.

GRÁFICA 3.1

Cumplimiento de los 4 criterios mínimos de uso no arbitrario de la autoridad y su distribución en la población sentenciada

La actuación legal o no arbitraria de la autoridad –respecto del uso de la fuerza en la detención y las prácticas de corrupción– se cumplió para el 37% de las personas sentenciadas.

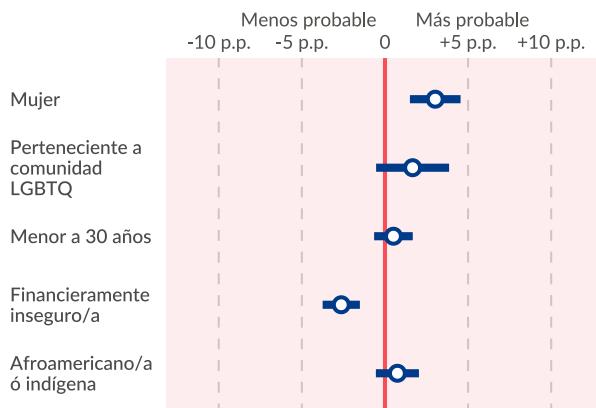


GRÁFICA 3.2

Criterios mínimos de acuerdo a las características sociodemográficas de los sentenciados

| PROBABILIDAD QUE SE CUMPLA MENOS DEL 50% DE LOS CRITERIOS

Es menos probable para las mujeres y las personas financieramente seguras que experimenten una actuación arbitraria de la autoridad.



| PROBABILIDAD QUE SE CUMPLA MÁS DEL 90% DE LOS CRITERIOS

Los mujeres y las personas financieramente inseguras tienen mayor probabilidad de experimentar una actuación legal de la autoridad.



Nota: Los puntos indican el efecto marginal de cada grupo sociodemográfico, medido en puntos porcentuales (p.p.). Las líneas indican el intervalo de confianza de dicho efecto al 95%. Para el grupo de personas que se cumplen menos del 50% de los criterios, sólo se les garantiza hasta 2 criterios. En cambio, para el grupo de personas que cumplen más del 90% de los criterios, se les garantiza como mínimo 3 criterios. Las mujeres son más probables en ambos grupos debido a que son más propensas a experimentar prácticas de corrupción, pero menos a ser detenidas con uso excesivo de la fuerza.

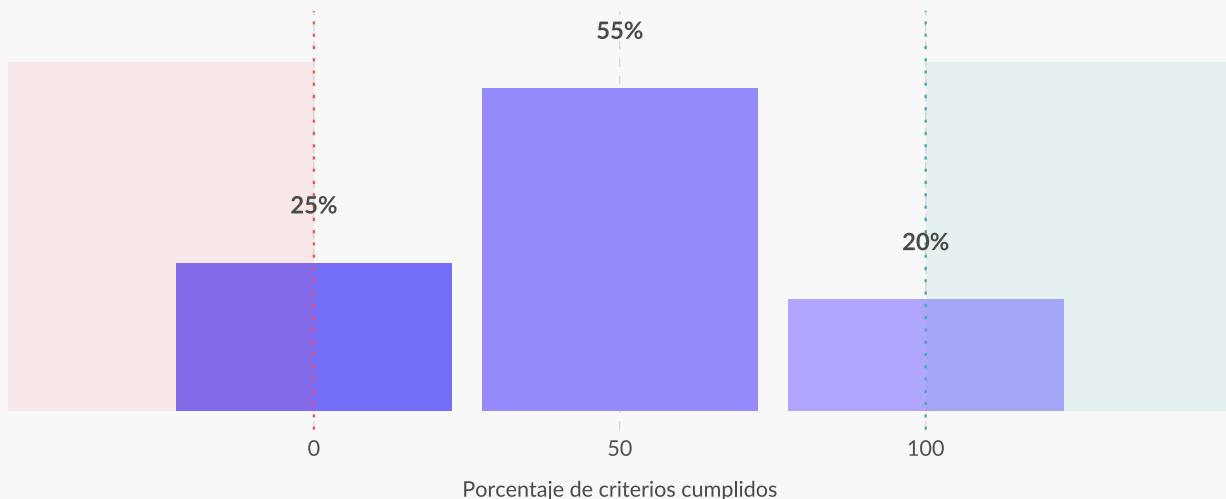
Fuente: ENPOL 2021.

PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

GRÁFICA 4.1

Proporción de personas cuyos derechos humanos fueron respetados

Los derechos del 20% de la población sentenciada fueron protegidos, mientras que estos derechos no fueron protegidos para el 25% de las personas sentenciadas.

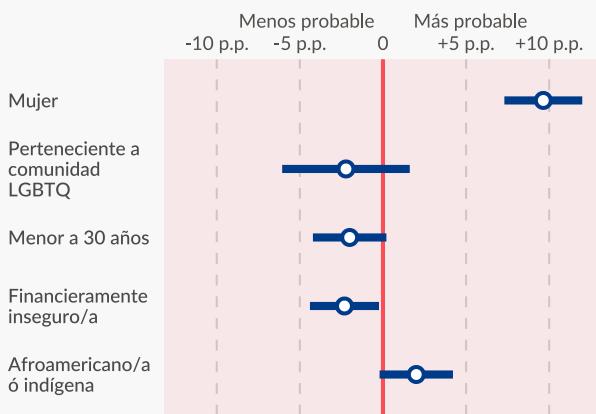


GRÁFICA 4.2

Criterios mínimos de acuerdo a las características sociodemográficas de los sentenciados

PROBABILIDAD QUE NO SE CUMPLA NINGÚN CRITERIO

La falta de garantía de los derechos humanos de las mujeres es más probable.



PROBABILIDAD QUE SE CUMPLAN TODOS LOS CRITERIOS

El cumplimiento pleno de los derechos humanos es menos probable en mujeres y jóvenes.



Nota: Los puntos indican el efecto marginal de cada grupo sociodemográfico, medido en puntos porcentuales (p.p.). Las líneas indican el intervalo de confianza de dicho efecto al 95%.

Fuente: ENPOL 2021.

DEBIDO PROCESO

USO NO ARBITRARIO DE LA AUTORIDAD

Uso excesivo de la fuerza

Práctica de corrupción durante
la detención, el MP y el juzgado

DEBIDO PROCESO

USO NO ARBITRARIO DE LA AUTORIDAD

2.1. Uso de la fuerza durante la detención

El uso de la fuerza se justifica cuando se tiene como objetivo la aplicación de la ley, y se garantiza el principio de proporcionalidad cuando el uso de la fuerza aplicado corresponde con la amenaza que activa determinado mecanismo de uso de la fuerza, conforme a la norma aplicable, consistente en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF) publicada en mayo de 2019. Esta Ley establece la correspondencia entre las conductas que accionan la respuesta policial (o alguna otra corporación) y los mecanismos de reacción que le corresponderán. La falta de correspondencia entre la amenaza y la reacción apuntala conductas desproporcionadas (o excesivas) por parte de la policía al momento de usar la fuerza en las detenciones.

Para conocer si las corporaciones aprehensoras hacen uso adecuado o desproporcionado de la fuerza al realizar la detención creamos una matriz que observa las interacciones entre las personas detenidas y las corporaciones.

Hallazgos preliminar

En promedio, la autoridad utiliza la fuerza de manera excesiva en el 64% del total de las detenciones. Sin embargo, el uso excesivo de la fuerza ha disminuido conforme ha transcurrido el tiempo. Además, este no se ejerce de manera homogénea sino se aplica en mayor medida a mujeres, personas con grado educativo menor a bachillerato y personas financieramente inseguras.

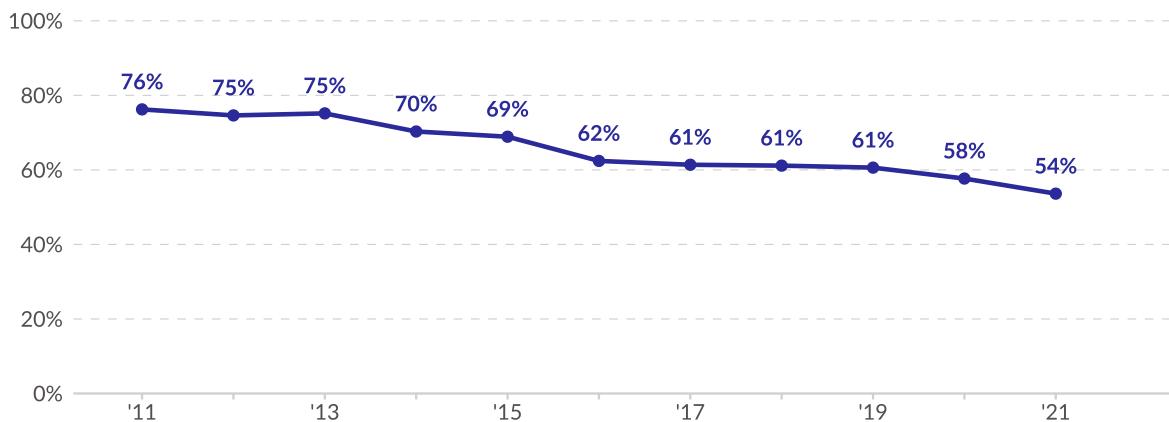
Por su parte, el uso excesivo de la fuerza es más frecuente en Operativos Conjuntos y en las Policías Estatales. Sin embargo, todas las corporaciones presentan un uso excesivo de la fuerza en más del 50% de los casos.

USO EXCESIVO DE LA FUERZA

GRÁFICA 5.1

Uso excesivo de la fuerza y cambios en el tiempo

Desde el 2011, el uso excesivo de la fuerza ha concentrado el 66% de los casos en promedio. Sin embargo, ha disminuido conforme ha madurado el sistema.

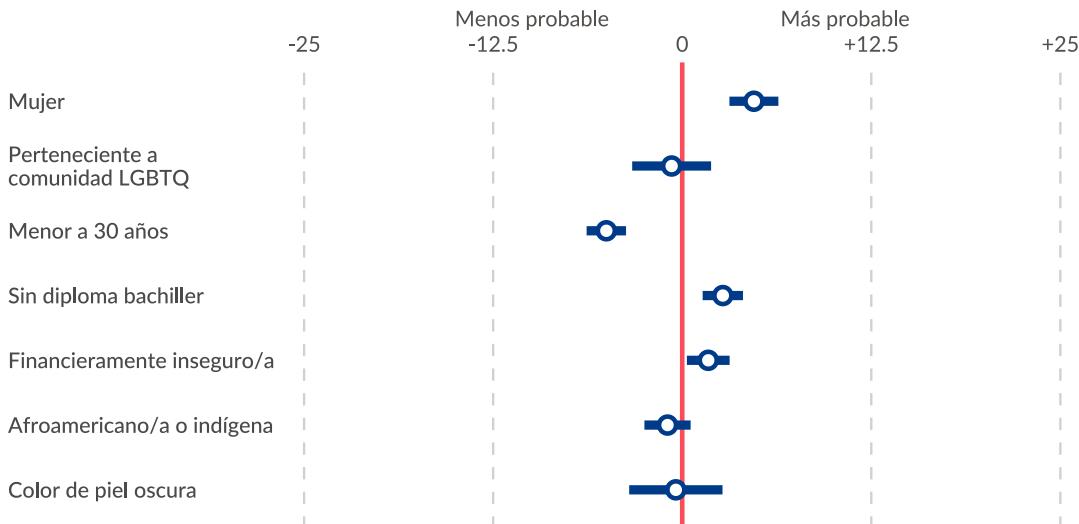


Fuente: ENPOL 2021

GRÁFICA 5.2

Uso excesivo de la fuerza por grupo poblacional

El uso excesivo de la fuerza es más probable en mujeres, personas con grado educativo menor a bachillerato y personas financieramente inseguras.

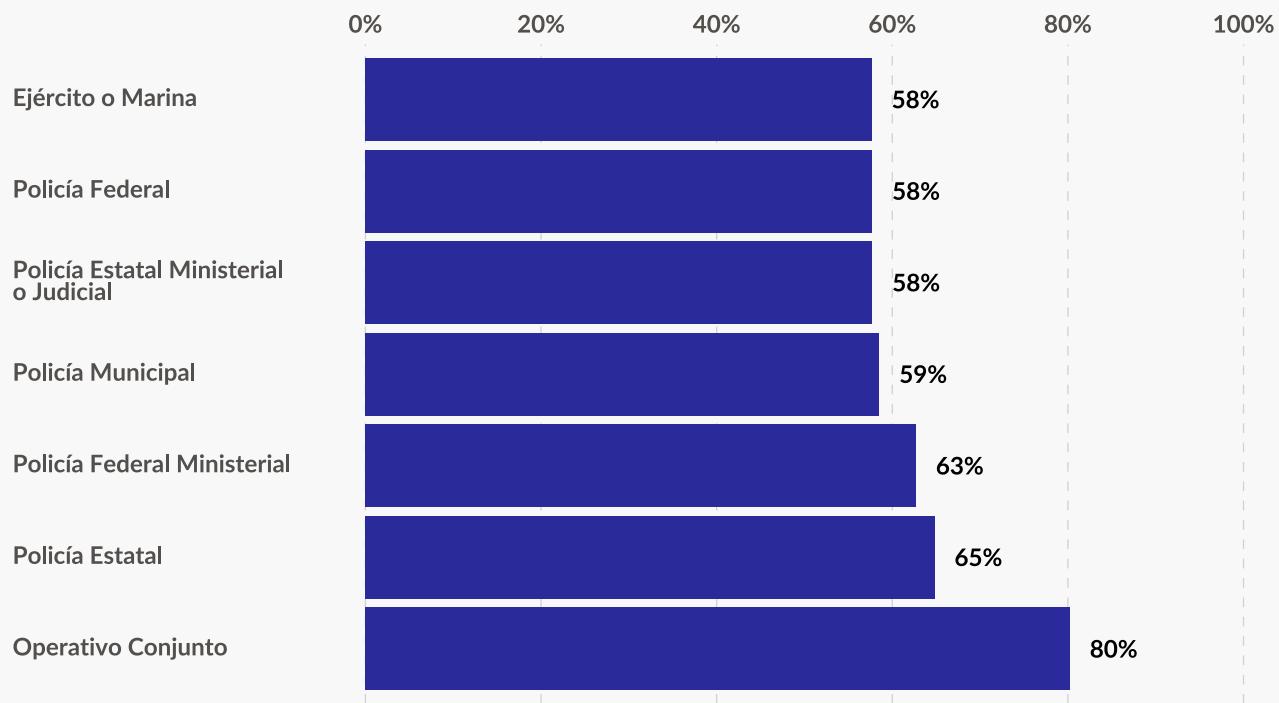


Fuente: ENPOL 2021

GRÁFICA 5.3

Uso de la fuerza por corporación

El uso excesivo de la fuerza es más frecuente en Operativos Conjuntos y en las Policías Estatales. Sin embargo, todas las corporaciones presentan un uso excesivo de la fuerza en más del 50% de los casos.



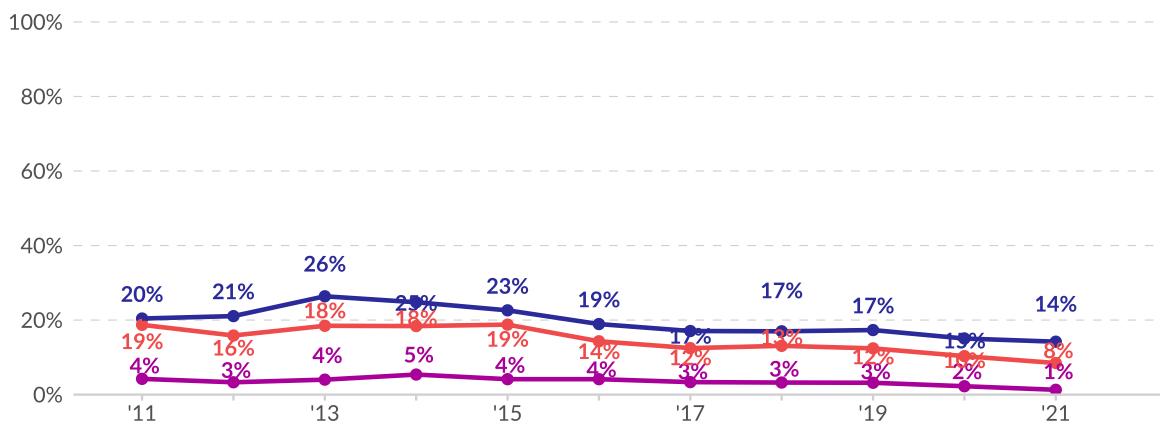
Nota: No se incluyó a la Guardia Nacional debido a las diferencias en el número de observaciones y años considerados, respecto del resto de las corporaciones.

PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN

GRÁFICA 5.4

Prácticas de corrupción reportadas en la detención, el MP y el juzgado

Las prácticas de corrupción han disminuido en los últimos diez años.



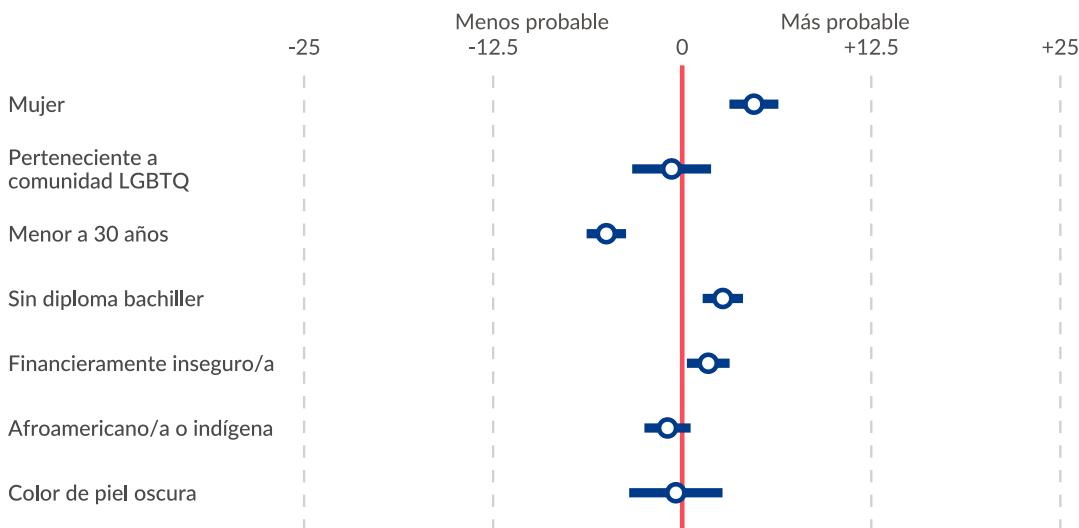
Nota: las prácticas de corrupción corresponden a personas procesadas y sentenciadas dentro del SJPA.

Fuente: ENPOL 2021

GRÁFICA 5.5

Prácticas de corrupción y los intercambios que ofrecen las autoridades en el proceso de justicia

La detención es el momento en donde más se ofrece la libertad a cambio de dinero u otros, mientras que en el juzgado se ofrecen cuestiones asociadas al proceso a cambio de dinero.



Nota: Al hablar de integridad física, se refiere a intercambiar o pedir dinero, favores o regalos por no hacerle daño a la persona o a su familia; al hablar de debido proceso, se refiere a pedir dinero u otros a cambio de modificar la versión de los hechos, la gravedad de los delitos o la sentencia, la celeridad en el proceso o la presentación de pruebas.

Fuente: ENPOL 2021

DEBIDO PROCESO

RESPETO A DERECHOS HUMANOS

Violación a la integridad
personal

Violación a la libertad

DEBIDO PROCESO

PROTECCIÓN A DERECHOS HUMANOS BÁSICOS

3.1. Violación de la integridad personal

La violación de la integridad personal a través de actos de tortura prevalece en el sistema penal aun después de la implementación de la reforma en un 76% de los casos en promedio. Las mujeres, jóvenes de 30 años o menos, afroamericanos o indígenas y las personas con piel oscura presentan mayor probabilidad de ser torturados.

No obstante lo anterior, hubo una disminución en las prácticas de tortura a partir de la implementación del Registro Nacional de Detenciones (RND) a nivel nacional durante 2019, pero no en todos los estados. En una tercera parte de las entidades, se observaron aumentos en las prácticas de tortura.

3.2. Violación de la integridad personal

La primera privación a la libertad se da en la detención, la cual puede ocurrir de manera ilegal o irregular (i.e. sacando a la persona de algún lugar o deteniéndola mientras caminaba por la calle), o bien de manera justificada.

Las detenciones irregulares ocurren, en promedio, en el 28% de los casos, respecto del resto de las formas de detención. No obstante, la proporción de detenciones irregulares ha disminuido en los últimos diez años. Esta mejora no es homogénea pues hubo nueve estados en donde las detenciones irregulares incrementaron; igualmente, este hallazgo nacional aplica para algunos pero no para todos los delitos.

El tiempo y lugar de traslado de la persona detenida también han cambiado conforme han transcurrido los años, pues aumentó la proporción de casos en los que se traslada a la persona en los primeros 30 minutos y aumentó la proporción de casos en los que trasladan a la persona a la policía.

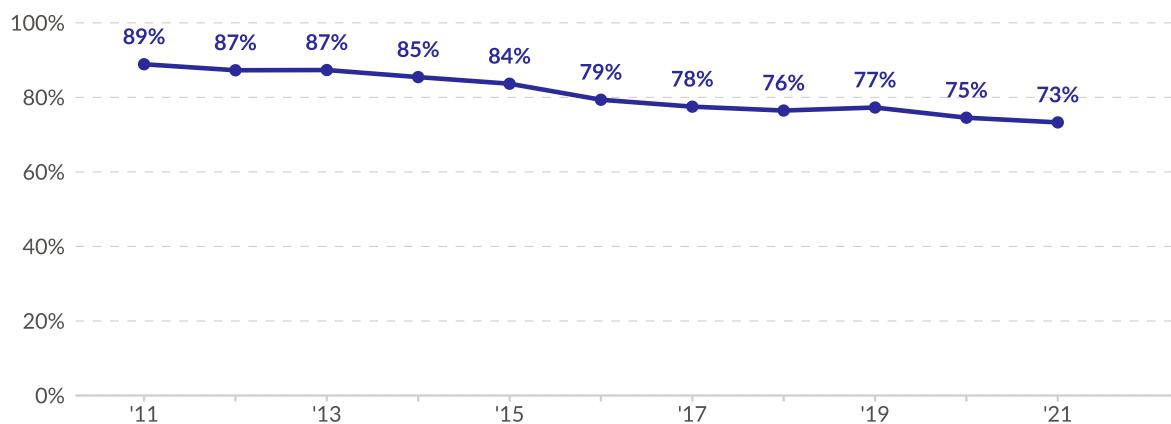
Por su parte, la restricción a la libertad se trató de analizar a través de la prisión preventiva y las sentencias condenatorias. En primer lugar, el 98.6% de la población enfrenta o enfrentó su juicio privado de la libertad. En segundo término, los cambios en la prevalencia de la Prisión preventiva oficiosa (PPO), así como de la severidad de las sentencias a través del tiempo son difíciles de medir debido a la naturaleza de la muestra de la ENPOL. Por definición, sólo las personas que aún se encuentran privadas de su libertad aparecen en la muestra de la ENPOL, lo que dificulta documentar las experiencias de personas con sentencias cortas que fueron arrestadas hace varios años. Esto es problemático porque entre más años pasaron entre el arresto de la persona y el levantamiento de la ENPOL, menos probable es observar personas con sentencias cortas, creando una correlación mecánica entre el año de arresto y la severidad de la sentencia, por lo que observar los verdaderos cambios en la severidad de las sentencias resulta imposible usando la ENPOL. En cuanto a la prevalencia de la PPO, el problema resulta de una alta correlación del uso de la PPO con sentencias largas, es decir, las personas con sentencias más largas también fueron sujetos de PPO en su mayoría. En ese sentido, el problema de la imposibilidad de observar personas con sentencias más cortas entre más años antes del levantamiento haya sido su arresto también se traslada al uso de PPO, dificultando observar personas no sujetas a PPO entre más años han pasado desde su detención.

TORTURA

GRÁFICA 6.1

Tortura generalizada desde la implementación del sistema

Desde el año de implementación de la reforma hasta la actualidad, la prevalencia de actos de tortura se presenta en un 76% en promedio.

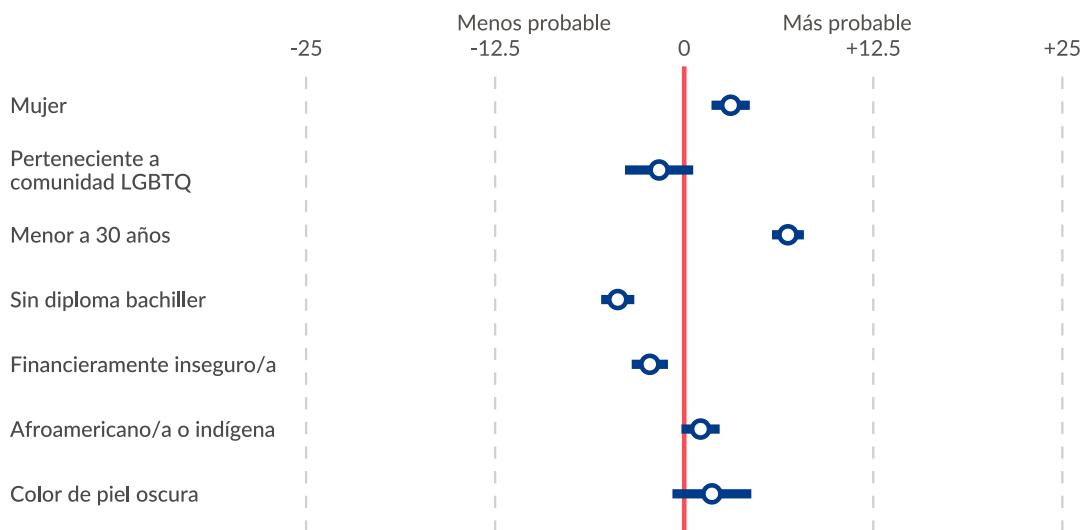


Fuente: ENPOL 2021

GRÁFICA 6.2

Tortura generalizada por grupo poblacional

Las mujeres, los jóvenes de 30 años o menos, afroamericanos o indígenas y las personas con piel oscura presentan mayor probabilidad de ser torturados.



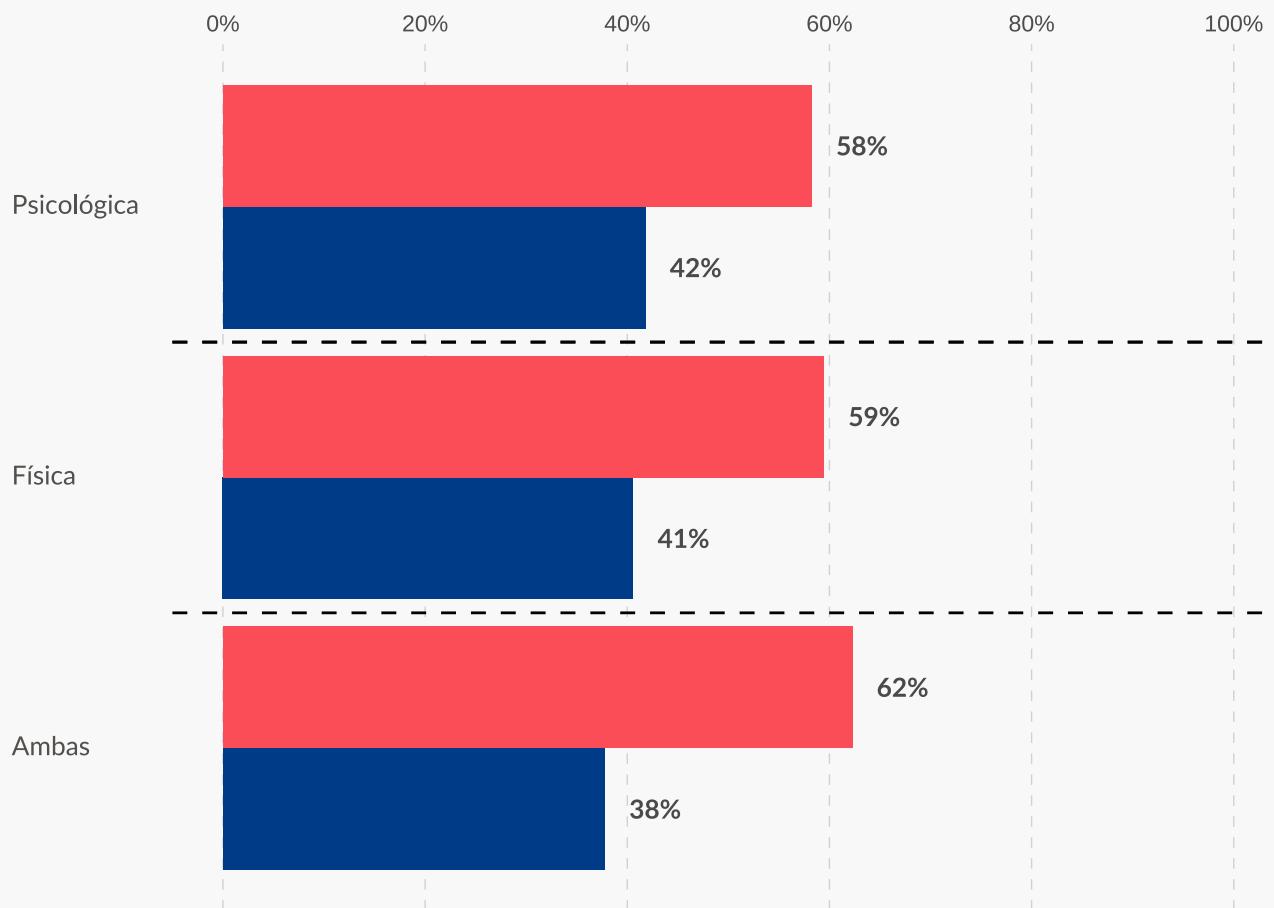
Fuente: ENPOL 2021

GRÁFICA 6.3

Cambios en la tortura a partir del Registro Nacional de Detención (RND)

A partir de la implementación del RND se observa una disminución en las prácticas de tortura.

● Dos años después del RND ● Dos años antes del RND

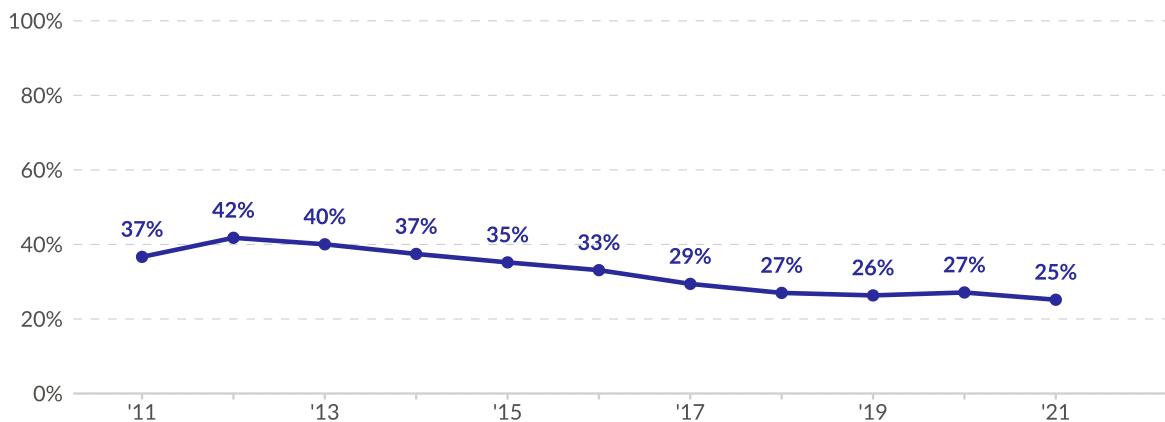


DETENCIONES

GRÁFICA 6.4

Detenciones regulares vs Detenciones irregulares

Desde la implementación de la reforma hasta la actualidad, las detenciones irregulares se han presentado en un 28% de los casos, en promedio. Sin embargo, la proporción de que éstas ocurran ha disminuido conforme ha madurado el sistema penal.

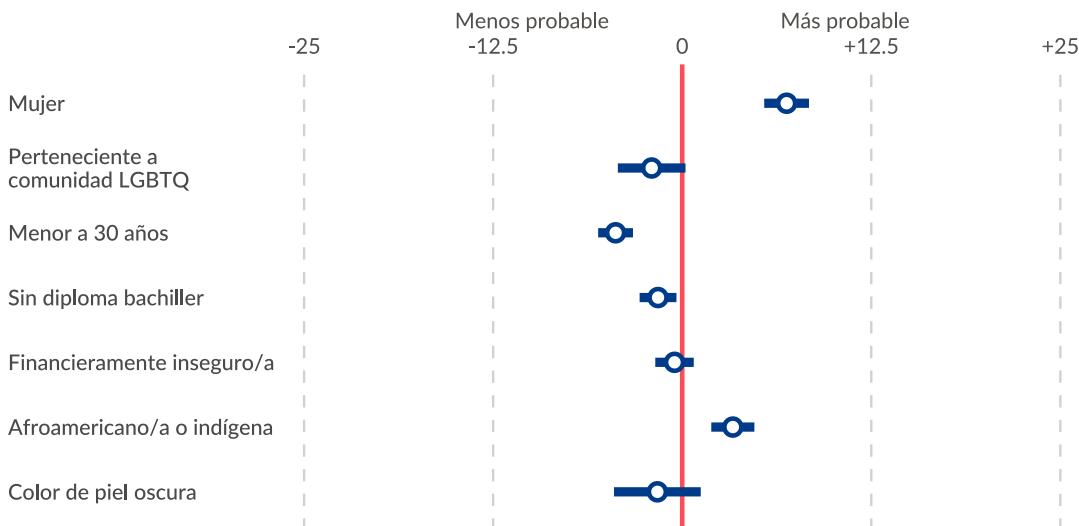


Fuente: ENPOL 2021

GRÁFICA 6.5

Detenciones irregulares por grupo poblacional

Las mujeres, los jóvenes de 30 años o menos y las personas autoidentificados como afroamericanos o indígenas tienen mayor probabilidad de ser detendios de forma irregular.

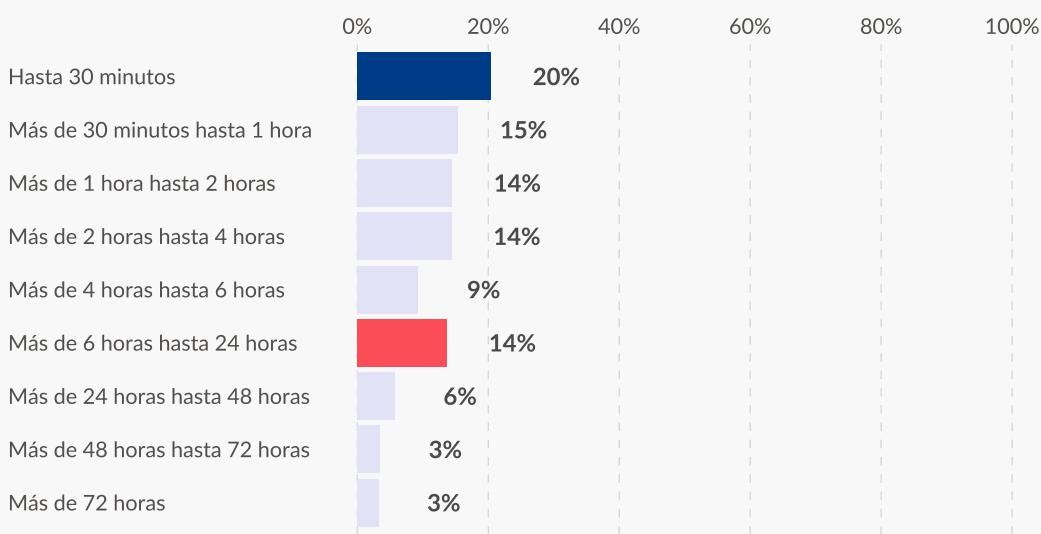


Fuente: ENPOL 2021

GRÁFICA 6.6

Tiempo de traslado

En los casos procesados por el sistema acusatorio, el tiempo de traslado más frecuente de las personas detenidas es el de 30 minutos.



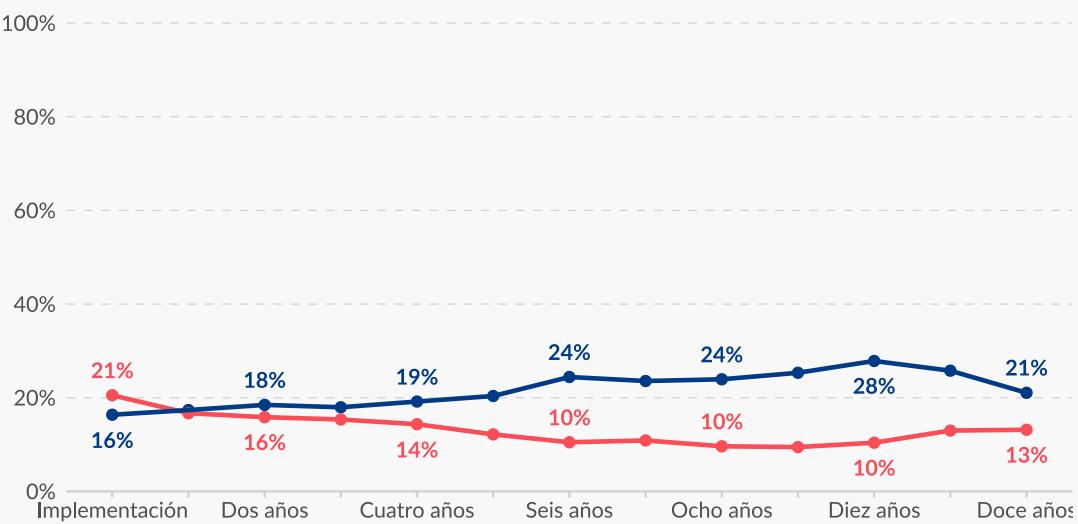
Fuente: ENPOL 2021

GRÁFICA 6.7

Cambios en los tiempos de traslado

La proporción de ser trasladado dentro de los primeros 30 minutos aumentó, conforme ha madurado el sistema penal.

- Hasta 30 minutos
- Más de 6 horas hasta 24 horas

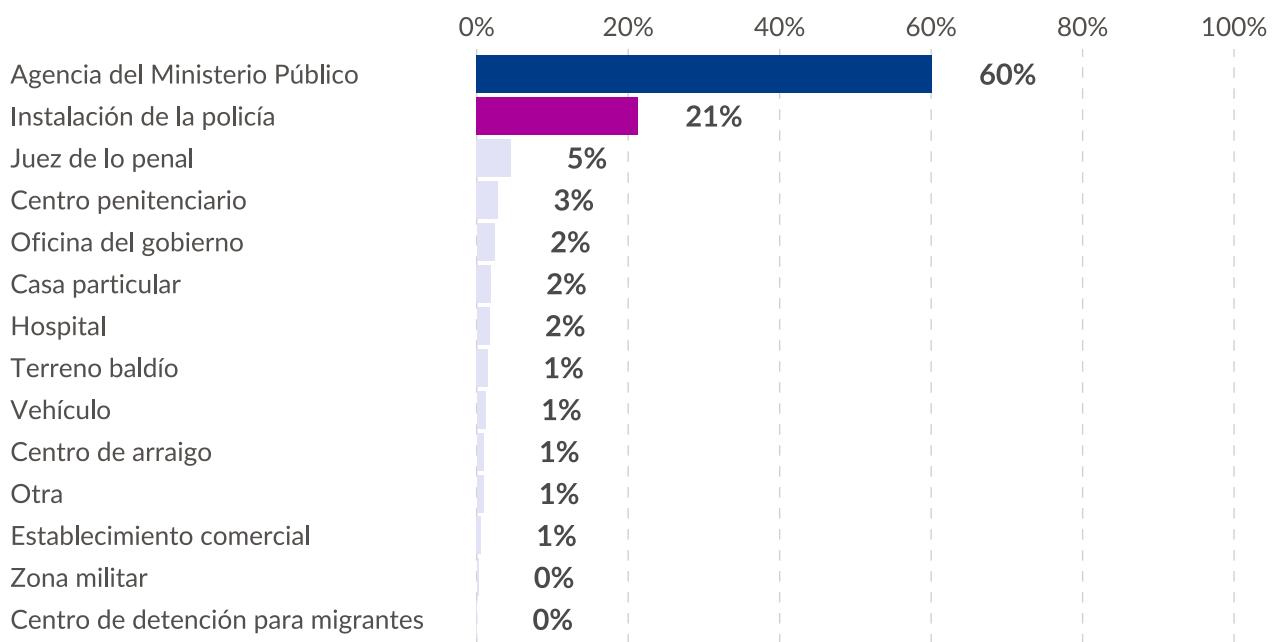


Fuente: ENPOL 2021

GRÁFICA 6.8

Primer lugar al que trasladan a las personas detenidas

En los casos procesados por el sistema acusatorio, el primer lugar de traslado después de la detención es la agencia del Ministerio Público.



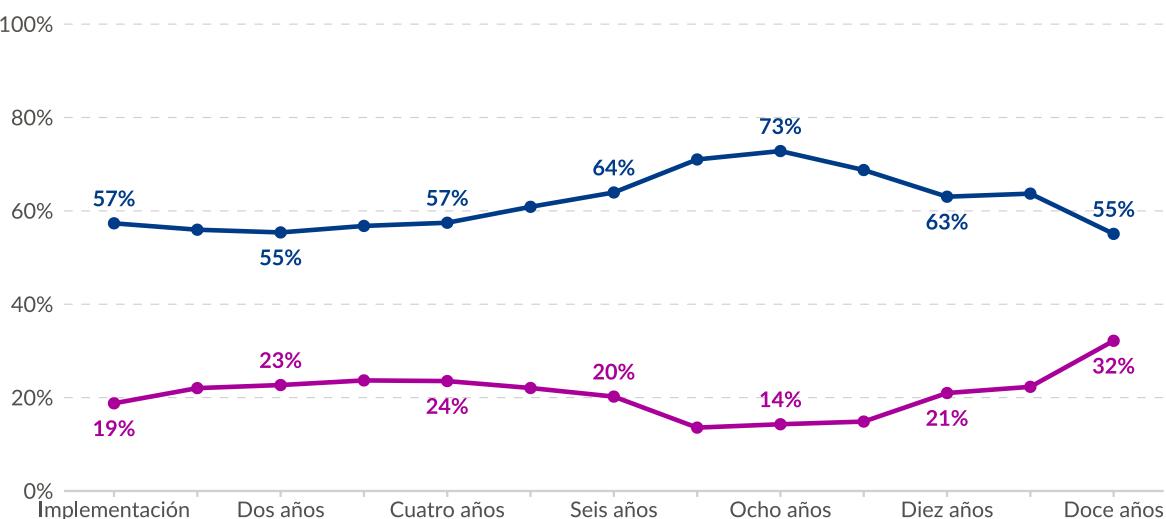
Fuente: ENPOL 2021

GRÁFICA 6.9

Cambios en el primer lugar al que trasladan a las personas detenidas

La proporción de casos en los que trasladan a la persona a la policía, ha aumentado conforme ha madurado el sistema penal.

● Ministerio Público ● Instalación de Policía



Fuente: ENPOL 2021